

LA INSERCIÓN DE COLOMBIA EN EL SISTEMA INTERNACIONAL CAMBIANTE
VENEZUELA

ESCENARIOS DE SALIDA DE LA CRISIS VENEZOLANA Y SUS POSIBLES REPERCUSIONES EN LA RELACIÓN COLOMBO-VENEZOLANA

RESUMEN

La salida a la crisis venezolana es contingente de los resultados de los referendos revocatorios en curso contra el presidente Chávez, y de sus partidarios en contra de representantes de la oposición. La actual crisis, caracterizada por una aguda polarización, es resultado de un largo proceso de deterioro de su economía y de una ruptura del viejo sistema de partidos políticos. Si bien los factores externos parecen haber jugado un papel menor en su desarrollo de la crisis, la salida a la crisis sí tendrá efectos internacionales y sobre las relaciones con Colombia. Bajo cualquiera de los escenarios es muy importante restituir los mecanismos bilaterales de cooperación para enfrentar los problemas que ninguno de los dos países podría resolver individualmente.

La relativa estabilidad política y social experimentada por Venezuela después del acuerdo de Punto Fijo en 1958, y de la cual hizo parte la reincorporación a la vida civil de las guerrillas, concluyó en los años ochenta en medio de una época de inestabilidad económica, corrupción, conflictividad social y tensión política. Expresiones de esas crisis son el “Caracazo” de 1989, los dos intentos de golpe de estado 1992 y la destitución en 1993 del presidente de Acción Democrática Carlos Andrés Pérez. El gobierno de transición de Ramón J. Velásquez fue seguido por la reelección de Rafael Caldera a bordo de una coalición formada en contra de su propio partido, el Copei. En medio de esa crisis, ofreciendo acabar con la pobreza y la corrupción, en enero de 1999 llegó al poder por vía electoral el teniente coronel Hugo Chávez. Desde su posesión, Chávez anunció el desmonte de lo que denominó la IV República y la creación de las bases de un nuevo sistema político.

FASES Y MOMENTOS DEL ENFRENTAMIENTO INTERNO Y LA TENSIÓN BINACIONAL

La primera fase del gobierno de Chávez (1999-2001) estuvo dedicada a la elaboración de la constitución bolivariana y a la relegitimación de los poderes públicos mediante sucesivos procesos electorales. Al comienzo, la mayoría de los venezolanos tenía esperanza de una profundización de la democracia y un aumento de la inclusión económica, política y social de los sectores tradicionalmente excluidos. El incremento de la conflictividad social mostraba la gravedad de la situación que enfrentaba Chávez. En esos dos años, el Estado contó con crecientes recursos provenientes del aumento del precio del petróleo, lo que le concedió al nuevo gobierno margen de acción interna y capacidad para desarrollar un activismo internacional dirigido a fortalecer la Organización de Países Exportadores de petróleo, OPEP, revi-



vir el tercermundismo y marcar distancia con Estados Unidos.

Las siempre inestables relaciones entre Colombia y Venezuela entraron, desde esta primera fase, en un periodo de tensión. A los efectos del conflicto colombiano se le sumaron las posiciones adoptadas por el gobierno de Venezuela sobre la naturaleza y los actores de dicha confrontación, así como la actitud de desconfianza del gobierno colombiano frente al proceso bolivariano y su temor al otorgamiento de apoyo y al status beligerante a las guerrillas. Estas posiciones contribuyeron a distanciar a las dos administraciones y a paralizar los mecanismos de vecindad.

La segunda fase del gobierno de Chávez (2001-2003) comenzó el 13 de noviembre de 2001 cuando, por decreto presidencial, el gobierno anunció 49 leyes dirigidas a profundizar la “revolución bolivariana”. Las medidas aumentaron la oposición que ya se venía incubando desde antes entre diversos sectores. El rechazo se extendía también al estilo personalista y belicoso de Chávez y al talante político de algunos de sus más directos colaboradores. A la incipiente oposición de unos partidos políticos desvertebrados, de los sindicatos ligados a ellos y del ya debilitado sector empresarial, se empezaron a sumar otros sectores: la Iglesia Católica, los medios de comunicación, numerosos profesionales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales habían votado por Chávez.

Ante la crisis de los partidos, los empresarios encabezaron, el 10 de diciembre de 2001, la convocatoria a un paro nacional con el fin de exigirle al gobierno derogar algunas de las leyes promulgadas, ante lo cual obtuvieron un importante apoyo ciudadano. La polarización política se agudizó y se profundizó aún más en 2002, eliminando posibilidades de negociación y acuerdo. En medio de movilizaciones de ambos lados, los medios de comunicación privados y oficiales se dedicaron a estimular el enfrentamiento.

En ese contexto, el 10 de abril de 2002, se originó un confuso golpe de Estado, acompañado por brotes de violencia política. El efímero gobierno *de facto*, encabezado por el empresario

Pedro Carmona, liquidó de un plumazo la institucionalidad bolivariana y dejó como saldo una oposición dividida. A su regreso al poder Chávez prometió una reconciliación cuyas esperanzas muy pronto se diluyeron. La polarización continuó, la Comisión de la Verdad sobre los hechos de violencia previos al golpe no se puso en marcha, el juzgamiento de los implicados se vio entrabada y las negociaciones entre gobierno y oposición se pospusieron una y otra vez.

Sólo en noviembre de 2002, pudo instalarse la mesa de negociación con el auspicio y la colaboración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Centro Carter. Pero la radicalización de las posiciones hacia un enfrentamiento de *suma-cero* se impuso. En esas condiciones, el 2 de diciembre de 2002 se inició un segundo paro de empresarios, trabajadores y diversos sectores sociales, que ya sobre la marcha se tornó indefinido por la parálisis de la industria petrolera. Pero las fiestas navideñas y de fin de año, el desabastecimiento, los problemas de la oposición y la respuesta del gobierno, lo hicieron languidecer hasta que concluyó el 2 de febrero de 2003.

Los graves problemas económicos generados por la parálisis, el desgaste de la oposición y las acciones del gobierno le dieron un nuevo aire al proyecto bolivariano. La creación del grupo de países amigos de Venezuela intentó reforzar la búsqueda de una salida negociada y finalmente, la única aceptada por las partes fue la contemplada por la nueva Constitución. Esto es, la posible convocatoria de un referendo. Allí se ha centrado la polarización, justamente cuando Chávez llega a la mitad de su periodo presidencial y se podría decidir la revocatoria de su mandato.

En medio del fracaso del paro el gobierno logró controlar uno de los bastiones de la oposición y la mayor fuente de recursos del Estado, la empresa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como impulsar su reestructuración y el cambio de directivos y trabajadores tras despedir alrededor de un 50% de la nómina. Así mismo, logró imponer un severo control de cambios para evitar la salida de divisas y la caída de la producción y exportación del petróleo y sus derivados. Con la consigna “ni un dólar para los golpistas”, Chávez intentó liquidar o al menos debilitar al sector privado que formaba parte de la oposición y que había quedado seriamente debilitado por los 63 días de paro.

A los efectos del conflicto colombiano se le sumaron las posiciones adoptadas por el gobierno de Venezuela sobre la naturaleza y los actores de dicha confrontación, así como la actitud de desconfianza del gobierno colombiano frente al proceso bolivariano y su temor al otorgamiento de apoyo y al status beligerante a las guerrillas.

En esta segunda fase, mientras el comercio binacional cayó drásticamente como producto de ese contexto de crisis y recesión, crecieron las tensiones en las relaciones colombo-venezolanas. Por un lado, la posición de Chávez frente al conflicto colombiano se volvió parte de la oposición y de la disidencia de militares venezolanos. Por otro lado, la exasperación con la actitud de Chávez ante la confrontación colombiana llevó a funcionarios del gobierno de Andrés Pastrana y a voceros empresariales a celebrar la llegada de Pedro Carmona al poder. El gobierno de Pastrana no rectificó aunque trató de restablecer las comunicaciones con Chávez, mientras Álvaro Uribe ha dicho que respeta la institucionalidad venezolana.

Aunque Chávez y Uribe se han encontrado tres veces en el último año, y se han comprometido a evitar la “diplomacia del micrófono”, varios de sus ministros han vuelto a denunciarse mutuamente. Pese a que se han puesto en marcha las comisiones presidenciales de negociación y de vecindad, sigue la parálisis del órgano binacional de carácter militar y policial, la COMBIFRON, cuyo funcionamiento podría ayudar a hacerle frente común a los problemas de seguridad en la frontera, que ninguno de los dos países está en capacidad de manejar por sí solo.

ESCENARIOS INTERNOS Y POSIBLES EFECTOS BINACIONALES

A pesar de la confusa situación por la que atraviesa Venezuela es posible vislumbrar dos escenarios probables con algunas variantes posibles en cada uno de ellos. La terminación del mandato de Chávez o la puesta en marcha de un nuevo gobierno.

1. EL GOBIERNO ACTUAL TERMINA SU MANDATO

El primer escenario estaría definido por la permanencia de Chávez en el poder hasta enero del 2007. Bien sea porque no se logre llevar a cabo el referendo o porque se realice después del 19 de agosto de 2004, fecha en que sería el vicepresidente el encargado de terminar los años restantes del período. O bien, porque la oposición no logre cumplir los requisitos del referendo (25% del censo electoral y un número igual o mayor número de votos que los obtenidos por Chávez en su reelección en 2000) o porque el megareferendo anunciado por partidarios de Chávez para revocarle el mandato a gobernadores y alcaldes de la oposición diluya el presi-

dencial. En este escenario es posible que el gobierno se abra o se endurezca, según sea la capacidad del chavismo para dar alguna respuesta a las expectativas de los sectores populares que lo respaldan, así como su disposición para incorporar demandas y sectores significativos de la oposición en torno a un proyecto común.

Varios factores favorecen este primer escenario. Ante todo, los derivados del fortalecimiento del gobierno, que sigue gozando de un respaldo popular más amplio que el de cualquier otro personaje de Venezuela, aunque ha perdido buena parte del apoyo político y electoral que tuvo al comienzo en los primeros años. El control que ha logrado de PDVSA le permite tener acceso a sus recursos sin ningún control ni chantaje de la oposición y, de este modo, contar con medios suficientes para subsistir.

El segundo se deriva de la existencia de una nueva elite política que Chávez ha ido generando en torno suyo. De ésta hace parte lo que queda de la vieja oposición a los partidos tradicionales y está compuesta por los integrantes del Movimiento V República (MVR), de Patria Para Todos (PPT) y otros grupos de izquierda tradicional. Aunque el Movimiento al Socialismo (MAS) le ha retirado su apoyo y quienes lo respaldan son en su mayoría grupos y personas que no tenían experiencia administrativa, el haber salido bien librados del golpe y de las repetidas movilizaciones les ha dado capacidad para mantener el control sobre los cinco poderes creados por la Constitución de 1999: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano –compuesto por la fiscalía, la contraloría y la defensoría del pueblo.

El tercer componente importante para que este escenario sea posible son las fuerzas militares. La Constitución de 1999 las convierte en fuerza deliberante y Chávez los ha involucrado en distintas dependencias del Estado. De ahí su transformación en actores políticos, verdaderos árbitros de la situación, y factor decisivo de la permanencia de Chávez en el poder. El cambio de mandos ha ido eliminando los conflictos internos entre los “institucionalistas” y los “chavistas”, y ha permitido, además, que el gobierno cuente con la Guardia Nacional como un instrumento para controlar los focos de conflicto social o político.

A pesar de la confusa situación por la que atraviesa Venezuela es posible vislumbrar dos escenarios probables con algunas variantes posibles en cada uno de ellos. La terminación del mandato de Chávez o la puesta en marcha de un nuevo gobierno.

Existe un amplio consenso, especialmente entre las organizaciones de la llamada sociedad civil, sobre la necesidad de un gobierno de transición (2004-2007) que trabaje sobre la base de un programa de unidad. Ante las dificultades que tendría que enfrentar el referendo, ese proceso podría trasladar las disputas políticas al terreno electoral que se avecina.

El cuarto elemento que incide es la fragmentación de la oposición, que se ha mostrado incapaz de construir un proyecto alternativo. De la

oposición hacen parte, por un lado, los viudos del poder, que sólo aspiran a recuperarlo sin tener en cuenta que su corrupción e incapacidad política originaron la situación de hoy, lo que ha generado un gran resentimiento popular. Por otra parte, en la oposición están también amplios sectores que, si bien tienen desacuerdos con el estilo de Chávez y con las estrategias del proyecto bolivariano, apoyan un cambio social y una ampliación de la participación política. También existe un amplio consenso, especialmente entre las organizaciones de la llamada sociedad civil, sobre la necesidad de un gobierno de transición (2004-2007) que trabaje sobre la base de un programa de unidad. Ante las dificultades que tendría que enfrentar el referendo, ese proceso podría trasladar las disputas políticas al

terreno electoral que se avecina. La oposición puede dividirse en torno a candidatos y de esta forma diluye en algún grado la presión por la caída del gobierno. Sin embargo, este escenario está sujeto a muchos sobresaltos derivados de si el gobierno actual termina su mandato.

En primer lugar, el aumento del poder del gobierno, la inexistencia de mecanismos efectivos de control sobre el mismo y la creciente dependencia de los demás poderes públicos en relación con él, suscitarían una doble preocupación interna. Incentivaría, la reacción de una oposición que, a pesar de su debilidad, sigue creciendo; y si el gobierno incrementara el control centralista podría generar tensiones regionales y locales que hasta ahora no han sido tan fuertes.

En segundo lugar, las nuevas élites políticas no están consolidadas y son cambiantes. De hecho, discrepar de las políticas y posiciones del presidente o del núcleo más cercano a él ha terminado en la expulsión o separación de muchos colaboradores centrales. A estas tensiones se les podrían sumar las crecientes rivalidades internas en el sector oficialista y sus dos principales componentes, el PPT y el MVR. De hecho, la disputa por el acceso a las posiciones de influencia es fuente permanente de tensión en la nueva élite política, lo que los debilita frente a la oposición.

En tercer lugar, el incremento de la acción de la fuerza armada nacional, en especial de la Guardia Nacional, puede engendrar conflictos internos que se podrían ver agudizados tanto por el rechazo a su papel en el control de las protestas sociales, como por el estrecho margen del gobierno para mantenerles privilegios. Ante las limitaciones para darle solución a los innumerables problemas heredados y a los que se han acumulado, es probable que se asista a un choque entre grupos armados ilegales de ambos lados, que ya han actuado en oportunidades anteriores. Su amplitud depende en este escenario del grado de apertura del gobierno y de su capacidad de respuesta a las expectativas sociales, así como de la posición que asuman las fuerzas militares al respecto.

En cuarto lugar, pueden desencadenarse dinámicas en la oposición política y económica con consecuencias sobre este escenario. Por una parte, ha empezado una presión en diversos sectores de la oposición dirigida a superar su fragmentación y falta de alternativas. Por eso se firmó el “Acuerdo por la unidad y la democracia” y la Coordinadora Democrática formuló un “proyecto de país” para los próximos años. Por otra parte, tampoco es fácil para el gobierno reemplazar a los actuales empresarios que hoy, debido a las crisis y al control de cambios, se han visto obligados a cerrar sus empresas. Cambiar la élite empresarial no es algo que se produzca por decreto presidencial ni que se pueda improvisar y es muy difícil profundizar un modelo estatista pues se agotó. Con una contracción económica del 14% y una producción industrial que retrocedió a niveles de 1987, seguir en esa dirección podría generar más bien freno a la reactivación económica y a la diversificación de la oferta exportable.

En quinto lugar, los sectores más necesitados y tradicionalmente excluidos, han puesto todas sus esperanzas en Chávez y le han mantenido el apoyo porque consideran que hasta ahora ha sido la oposición la no que lo ha dejado gobernar. Pero hay problemas urgentes que requieren acción. La pobreza ha aumentado tan drásticamente que alcanza el 80% de la población, el ingreso *per capita* es el más bajo en cuarenta años, el desempleo ha sobrepasado el 20% y más de la mitad de la población trabaja en el sector informal, que sobrevive a través del contrabando. Si el ingreso petrolero lo permite, el gobierno puede continuar su política de subsidios y de generación de empleos de subsistencia para algunos sectores afectados. Sin embargo, los planes de emergencia son insufi-

cientes, y el margen de maniobra del gobierno es muy limitado. A la conflictividad social y política se le han venido sumando altos grados de inseguridad ciudadana, así como un fuerte aumento de emigración de sectores medios de la sociedad.

En sexto lugar, los medios de comunicación privados que hayan estimulado la polarización del conflicto político también se verían intervenidos como lo prefigura la ley de contenidos que cursa en la Asamblea Nacional. Además, la represión y las dificultades económicas pueden afectar las organizaciones de la llamada sociedad civil que, aunque han tenido un importante apoyo en la construcción de una conciencia ciudadana sobre los derechos humanos y las libertades públicas, han enfrentado políticas del gobierno.

Estos factores internos pueden encontrar refuerzos en un contexto regional e internacional complejo que le impone serias restricciones a la terminación del gobierno chavista. Ante todo, Estados Unidos ha querido fijarle mojones al proceso. Entre la primera y la segunda etapa del proyecto bolivariano, Washington pasó de la pública expresión de malestar ante ciertas acciones internacionales de Chávez –en particular su negativa a aceptar la interdicción aérea del narcotráfico– a incrementar su intolerancia con el proceso interno chavista y a estimular o aprobar públicamente el golpe. Los fallidos resultados del golpe y del paro, así como las inconsistencias de la oposición, llevaron a Washington a asumir una postura más pragmática que deja actuar a Chávez, siempre y cuando garantice que Venezuela seguirá siendo un abastecedor seguro de petróleo. Las negociaciones para la venta del crudo a la reserva estratégica de Estados Unidos en condiciones favorables que, según se especula están en curso, podrían indicar un entendimiento sobre lo fundamental entre los dos gobiernos.

No obstante esa distensión, el curso de los acontecimientos podría ser alterado por distintos factores: la unilateralidad de Estados Unidos que aumenta los costos de disenter y el perjuicio que puedan sufrir empresas estadounidenses por las políticas económicas tomadas por el gobierno, entre otros. Además, el estado de ingobernabilidad e impunidad lleva al aumento de contrabandos de armas para las guerrillas colombianas y a una mayor penetración del narcotráfico y otras conductas delictivas asociadas. Además, la invasión militar de Estados Unidos a Irak, que lo ha convertido en una potencia asiática dis-

puesta a quedarse en la región para controlar las rutas petroleras, puede chocar con los planes del presidente Chávez de convertir al petróleo y la OPEP en un arma de política internacional y en un factor de poder.

A nivel regional, si bien en Suramérica han llegado al poder gobiernos ligados a sectores populares como ocurrió en Ecuador y Brasil –además de Venezuela–, o surgidos del cuestionamiento a los procesos de ajuste como ocurrió en Argentina y podría suceder en Paraguay o Uruguay, es difícil pensar en la conformación de una fuerza política antiglobalización a nivel gubernamental, y menos de un liderazgo latinoamericano ejercido por Chávez. Los reiterados acercamientos del presidente venezolano a Luiz Inacio Lula da Silva pueden generar una mayor participación de Brasil en el mercado de ese país y algunas oportunidades de Venezuela en el nordeste brasileño, pero no necesariamente un apoyo de Lula al proyecto bolivariano. Tampoco significan un respaldo a la conformación de nuevas estructuras que confronten al sistema interamericano, como las propuestas por Chávez para integrar las fuerzas armadas de la región sin Estados Unidos, la creación de un mecanismo alternativo al ALCA o de una Petroamérica que integre las compañías petroleras de la región. El gobierno de Chávez podría más bien quedar aislado de los procesos en curso y limitado a fortalecer relaciones con los movimientos sociales anti-globalización como el Foro Social Mundial, con sectores de oposición de diferentes países como el de Evo Morales en Bolivia o el de los indígenas en Ecuador.

En este primer escenario es posible prever que si no hay un esfuerzo conjunto para reconocer y rescatar la positiva contribución que a cada lado ha generado la integración comercial, ambos países podrían establecer barreras para sus productos, y el comercio dejaría de servir como amortiguador de las tensiones causadas por el diferendo territorial y por divergencias entre los gobiernos. Es además probable que ante la falta de actuación común frente al tráfico de armas desde Venezuela hacia Colombia y otros temas de seguridad, los conflictos fronterizos se recrudezcan y que unos y otros grupos violentos venezolanos encuentren respaldo y articulación con los del lado colombiano.

Los fallidos resultados del golpe y del paro, así como las inconsistencias de la oposición, llevaron a Washington a asumir una postura más pragmática que deja actuar a Chávez, siempre y cuando garantice que Venezuela seguirá siendo un abastecedor seguro de petróleo.

Si no se separan las discrepancias políticas y de estilo entre los dos gobiernos de las relaciones interestatales es altamente probable que se profundicen las fricciones en la relación binacional y se generen divergencias diplomáticas en ámbitos internacionales.

En el marco de unas fuerzas militares que ocupan un lugar importante en la definición de la política nacional e internacional, es posible que se de un distanciamiento entre las fuerzas militares y policiales de ambos lados. En medio de la percepción de sectores venezolanos de que el Plan Colombia introduce un desequilibrio militar en su contra, es factible que se reactive el diferendo fronterizo para justificar el incremento del gasto militar y la adquisición de nuevos equipos y armamentos. En suma, si no se separan las discrepancias políticas y de estilo entre los dos gobiernos de las relaciones interestatales es altamente probable que se profundicen las fricciones en la relación binacional y se generen divergencias diplomáticas en ámbitos internacionales. Pero también es probable que si funcionan los mecanismos binacionales, incluida la COMBIFROM, ante el limitado margen internacional y regional de acción, las divergencias políticas entre los dos gobiernos pesen menos y la relación pueda encontrar formas de tramitación de los asuntos cotidianos de la vecindad que sin avances sustanciales tampoco agudice las tradicionales tensiones.

En el marco de unas fuerzas militares que ocupan un lugar importante en la definición de la política nacional e internacional, es posible que se de un distanciamiento entre las fuerzas militares y policiales de ambos lados. En medio de la percepción de sectores venezolanos de que el Plan Colombia introduce un desequilibrio militar en su contra, es factible que se reactive el diferendo fronterizo para justificar el incremento del gasto militar y la adquisición de nuevos equipos y armamentos. En suma, si no se separan las discrepancias políticas y de estilo entre los dos gobiernos de las relaciones interestatales es altamente probable que se profundicen las fricciones en la relación binacional y se generen divergencias diplomáticas en ámbitos internacionales. Pero también es probable que si funcionan los mecanismos binacionales, incluida la COMBIFROM, ante el limitado margen internacional y regional de acción, las divergencias políticas entre los dos gobiernos pesen menos y la relación pueda encontrar formas de tramitación de los asuntos cotidianos de la vecindad que sin avances sustanciales tampoco agudice las tradicionales tensiones.

En el marco de unas fuerzas militares que ocupan un lugar importante en la definición de la política nacional e internacional, es posible que se de un distanciamiento entre las fuerzas militares y policiales de ambos lados. En medio de la percepción de sectores venezolanos de que el Plan Colombia introduce un desequilibrio militar en su contra, es factible que se reactive el diferendo fronterizo para justificar el incremento del gasto militar y la adquisición de nuevos equipos y armamentos. En suma, si no se separan las discrepancias políticas y de estilo entre los dos gobiernos de las relaciones interestatales es altamente probable que se profundicen las fricciones en la relación binacional y se generen divergencias diplomáticas en ámbitos internacionales. Pero también es probable que si funcionan los mecanismos binacionales, incluida la COMBIFROM, ante el limitado margen internacional y regional de acción, las divergencias políticas entre los dos gobiernos pesen menos y la relación pueda encontrar formas de tramitación de los asuntos cotidianos de la vecindad que sin avances sustanciales tampoco agudice las tradicionales tensiones.

2. NUEVO GOBIERNO

El segundo escenario podría derivarse de la saturación de la mayoría de la población venezolana con la situación de ingobernabilidad que la llevaría a presionar por el referendo y luego a participar masivamente, en el primer semestre de 2004, en la revocatoria del mandato y la escogencia de un nuevo gobierno.

En ese marco pueden darse varias alternativas según se extraigan o se olviden las lecciones de lo ocurrido en el derrumbe del régimen político de Punto Fijo, en el intento de crear la V República o de restaurar la IV. Una opción consistiría en la continuidad en el poder de un chavismo sin Chávez, a quien se le hubiera revocado el mandato pero que su movimiento gana las elecciones ante la división de la oposición. La otra supondría el triunfo de un vocero de la oposición.

El nuevo gobierno podría igualmente tomar diversos caminos. Si estuviera dirigido por un líder chavista podría tratar de profundizar el proyecto bolivariano con medidas que generen

una nueva polarización o con un estilo político menos conflictivo que incluso incorpore en el gobierno demandas y sectores de la oposición. Un líder de la oposición a la cabeza del nuevo gobierno podría tratar de revivir las fuerzas políticas tradicionales y desmontar las instituciones bolivarianas, pero generaría una fuerte reacción y polarización, o, apoyándose en una coalición, podría impulsar un proceso de reconstrucción de las instituciones democráticas, de la economía, del tejido social, de la tolerancia política y de la gobernabilidad democrática. Los retos para cualquier nuevo gobierno serán múltiples y se agravarían si intentara desconocer a la otra parte de la sociedad que cuenta con respaldo social y político.

En cualquiera de las modalidades, las encrucijadas de este escenario, además del gobierno y de factores externos, depende del comportamiento de cuatro actores: los partidos políticos tradicionales –que continuarían tratando de recobrar el terreno perdido– y los partidos emergentes –que pugnarían por un mayor apoyo electoral; las fuerzas armadas, que vienen de jugar un papel político de gran significación y querrían conservarlo: los empresarios, debilitados en todo este proceso, que buscarían su recuperación; y las organizaciones sociales y ciudadanas, que buscarían alternativas capaces de representar realmente sus intereses y necesidades.

Los partidos políticos se verían presionados a desarrollar un proceso de transformación dirigido a revertir la polarización y superar las prácticas políticas excluyentes así como a incorporar y representar los intereses de diferentes sectores que han estado movilizados en los últimos años. Si no se dan esas transformaciones internas, si no surgen nuevos líderes moderados o si no se hubiera producido un aprendizaje político por parte de la dirigencia tradicional o emergente y de los ciudadanos, podrían surgir nuevamente liderazgos personalistas, continuaría la crisis de los partidos y el deterioro agravado del sistema político. La inestabilidad y debilidad llevaría también a problemas en la reconstrucción de la institucionalidad democrática.

Los militares, también en este escenario, jugarían un papel importante. Bien sea porque hubieran contribuido a preparar un acuerdo nacional y las nuevas elecciones o porque se resistan a retornar a las tareas de defensa nacional, a la exclusión de la vida política y al sometimiento al poder civil. Juega en favor de ese proceso el que dentro de pocos años pasa-

rían a retiro la mayor parte de los militares que acompañaron a Chávez en su intento de golpe en 1992 y han ocupado un importante papel en su gobierno. Esto podría permitir que surja un nuevo liderazgo militar dispuesto a participar en la reconstrucción de la democracia y en la redefinición de su papel. Juegan en contra de ese proceso varios factores: el que la oficialidad media y la tropa han estado muy permeadas por la polarización, la existencia de grupos que no querrán abandonar los privilegios derivados de su participación política y en el poder, y las rivalidades internas resultantes de la situación de privilegio de que ha gozado el ejército por encima de la fuerza aérea y la armada.

Los empresarios también le plantean retos al nuevo gobierno, debido a la magnitud de los problemas a enfrentar y al agudo debilitamiento que han sufrido. El ámbito económico será el más conflictivo dados los adversos factores internos y externos, requerirá compromisos para reactivar la economía, reducir el desempleo y la inflación, y superar la dependencia de la industria petrolera. Es posible que el nuevo gobierno genere un apoyo internacional para la reconstrucción económica y social, que podría llegar unido a un retorno de los capitales internos fugados y de la inversión extranjera. Estos exigirán apertura, garantías a la propiedad y al estado de derecho, funcionamiento de reglas claras y permanentes, marcos regulatorios efectivos y transparentes así como un nuevo tipo de la alianza y cooperación entre el Estado y el sector privado. Todas esas tareas implicarán años y requerirán un consenso tanto sobre la necesidad de producir riquezas y no sólo de redistribuir la renta petrolera, como de revertir la cultura estatista/rentista tanto de los políticos como de algunos empresarios.

Las organizaciones y redes sociales, igualmente, han cobrado fuerza en el proceso de respaldo o enfrentamiento con Chávez, y las amplias movilizaciones del gobierno y de la oposición han generado una ciudadanía mucho más activa. Ese acumulado podría ser usado para hacerle frente a los problemas derivados de la estabilización económica que tendría que introducir el nuevo gobierno mediante medidas duras e impopulares, las cuales agudizarían las tensiones sociales. Así, tanto el gobierno central como las autoridades regionales y locales se verían expuestos a mayores presiones tanto por los derechos humanos, sociales y ciudadanos como por la transparencia y la rendición de cuentas. Si éstas demandas no son atendidas

rápidamente, es muy posible que esa misma ciudadanía y esos sectores sociales pasen a la confrontación puesto que sus necesidades se verán exacerbadas por la difícil situación económica y social que enfrentan los venezolanos. Esto podría dificultar la reconciliación, pero también podría ser la oportunidad para fomentar un nuevo acuerdo social que permita crear una estabilidad política y social más profunda. No hay que desconocer, sin embargo, que la polarización, la frustración por la falta de resultados de las manifestaciones y paros, haya podido generar también un cansancio que impida la participación ciudadana una vez se inicie el proceso de reformulación y reconstrucción de la institucionalidad.

Uno de los factores en contra de la reconciliación, ya sea encabezada por el movimiento bolivariano o por alguien de la oposición, es el rechazo por parte de los sectores más radicales a ese proceso en ambos lados, los cuales podrían pasar a la clandestinidad y al enfrentamiento armado con el nuevo gobierno. Por lo tanto, es posible que los conflictos políticos inevitables en coaliciones de por sí inestables y cambiantes tengan como escenario no solamente las instituciones y procesos legales, democráticos y electorales sino que se extiendan a la confrontación especialmente en los grandes centros urbanos. En ese caso, a la inseguridad ciudadana se le añadiría la violencia política. Así no se pase al enfrentamiento violento, en este escenario habrá un incremento de la conflictividad en el marco de la restauración de una gobernabilidad democrática. No obstante ese contexto, habrá una disminución considerable de los conflictos externos y es previsible que las relaciones con sus vecinos y con Estados Unidos mejoren de manera significativa.

Con el actor externo más importante, Estados Unidos, el nuevo gobierno sea chavista o de la oposición, tendría que replantear sus relaciones no sólo para recomponer las relaciones sino para atender las expectativas de mayor autonomía que expresaba el apoyo con el que contó el gobierno de Chávez. En el marco internacional, el acercamiento a los productores de petróleo podría constituir un esfuerzo dirigido a mejorar la capacidad negociadora y a diversificar las relaciones de Venezuela.

Con el actor externo más importante, Estados Unidos, el nuevo gobierno sea chavista o de la oposición, tendría que replantear sus relaciones no sólo para recomponer las relaciones sino para atender las expectativas de mayor autonomía que expresaba el apoyo con el que contó el gobierno de Chávez.

En relación con Colombia, este escenario requeriría de la puesta en marcha permanente de los mecanismos de vecindad y de esfuerzos por superar la mutua desconfianza derivada

de los problemas limítrofes. Si es un gobierno de la oposición, es probable que, dada la mayor convergencia política entre los gobiernos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico articulen acciones conjuntas de control de los tráficos que nutren estos procesos de armas, explosivos, insumos químicos. Si es un gobierno chavista, los ejes de actuación internacional de un nuevo gobierno estarían dirigidos a lograr la reinserción de Venezuela en los esquemas de integración, especialmente en la Comunidad Andina (CAN), al respeto de sus instituciones, de los compromisos y fallos del sistema de regulación de conflictos, así como a la búsqueda de una negociación conjunta con el MERCOSUR. Aunque no exento de desacuerdos y discusiones, probablemente habría una participación mucho más activa y no confrontacional en el proceso de negociaciones del ALCA a partir de un acuerdo de la CAN con el MERCOSUR. Otro es el resultado si se impone la bilateralización de las relaciones

de cada país y si estas se desarrollan en direcciones contrarias: Venezuela con Brasil, Colombia con Estados Unidos.

En conclusión, aunque pueden darse acontecimientos inesperados que presionen en una u otra dirección, cualquier de los dos escenarios tienen factores a favor y en contra para la permanencia o salida de Chávez. Cualquiera de los dos escenarios da lugar a un gobierno de transición. Según la forma más o menos abierta o cerrada como se desarrolle este periodo puede dar origen a una mayor conflictividad interna o a nuevos acuerdos nacionales más incluyentes. La tensión y exclusión se alimentan del odio social y hasta étnico que ha engendrado la polarización y que podrían llevar a la violencia. Además, ahuyentan la inversión y empujan a la población a emigrar con sus recursos, lo que lleva al país a mantener su esquema económico sobre la base de la renta petrolera. Un nuevo acuerdo nacional tiene a su favor la tradición de movilización pacífica del pueblo venezolano que, pese a coyunturas tan críticas y a la aguda división del país, no ha permitido que se genere una confrontación masiva. También tiene a favor el que, en el último medio siglo, los venezolanos han sabido canalizar sus conflictos por la calle o las urnas. Así mismo, que históricamente, cuando los proyectos y partidos políticos se han agotado, lo venezolanos han sabido realizar cambios sustanciales que reflejan mejor las nuevas realidades políticas, económicas y sociales y plasmarlos en un nuevo acuerdo nacional.

Cualquiera de los dos escenarios da lugar a un gobierno de transición. Según la forma más o menos abierta o cerrada como se desarrolle este periodo puede dar origen a una mayor conflictividad interna o a nuevos acuerdos nacionales más incluyentes. La tensión y exclusión se alimentan del odio social y hasta étnico que ha engendrado la polarización y que podrían llevar a la violencia.

ESTE DOCUMENTO ES EL RESULTADO DEL GRUPO DE TRABAJO VENEZUELA COORDINADO POR SOCORRO RAMÍREZ

El proyecto «La inserción de Colombia en el sistema internacional cambiante» se emprendió en marzo de 2003, en consorcio con la Academia Diplomática de la Cancillería; Centro de Pensamiento Estratégico Internacional -CEPEI, Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes; Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra -CESEDEN; Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario; Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana; Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia; Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -FESCOL; Fundación Hanns Seidel; y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales -IEPRI de la Universidad Nacional, con la coordinación de FESCOL.

LAS IDEAS EXPRESADAS EN ESTE POLICY PAPER NO COMPROMETEN A LAS INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DE ESTE PROYECTO.

SITIO WEB: www.colombiainternacional.org.co